

BIENESTAR Y CRISIS: ENTRE LA QUIEBRA Y LA DESPROTECCION

La crisis económica en los países avanzados ha reabierto, con virulencia inusitada, el debate sobre el Estado del bienestar. Neoliberalismo y socialdemocracia pugnan por aplicar sus recetas.

Posiblemente, la profundidad de la crisis—de marcada componente estructural—suscite una convergencia pragmática para intentar su superación.

En todo caso, ninguna propuesta de salida de la crisis puede soslayar la cuestión de las coberturas históricamente alcanzadas, ni la de los déficits sociales que aún persisten.

1. ESTADO DEL BIENESTAR Y CRISIS

Por Estado del bienestar o sociedades del bienestar, se entienden aquellas configuradas por economías avanzadas en las que la intervención del sector público de la economía es relevante, en particular en la cobertura de derechos económicos y servicios sanitarios y sociales.

El Estado del bienestar inicia su gestación en el último tercio del siglo pasado, con la incorporación a las cartas magnas de los países más desarrollados de determinados derechos de los ciudadanos. Sin embargo, es en este siglo y en particular a partir de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando su apogeo en los años 60 y 70, cuando se puede hablar del Estado del bienestar en los términos en que hoy se reconoce.

Los países que han dado lugar a diversas modalidades de Estados del bienestar atraviesan hoy un período de recesión eco-

nómica que está cuestionando la bondad del propio modelo. Tiene ello lugar tras el desmoronamiento político y económico de los países del área del denominado «socialismo real», ocurrido formalmente a partir de 1989.

No obstante tener la actual situación de crisis económica características propias y diferenciadas frente a otras anteriores, no parecen apuntarse en el plano económico propuestas innovadoras para la superación del actual estado de cosas.

En efecto, el tamaño del sector público y la dimensión y titularidad de aquellas coberturas que le son tradicionalmente inherentes en los estados modernos, parece ser la principal clave de la cuestión. «¿Más o menos Estado?», sería el dilema del que no conseguiríamos escapar.

Corroborada tras la caída del muro, la primacía del mercado como mecanismo de asignación de bienes y servicios, las opciones para intentar enderezar el rumbo

económico serían en esencia, «más mercado» para la interpretación neoliberal y «al menos tanto Estado», cuando no «más Estado», para la aproximación socialdemócrata.

2. NEOLIBERALISMO Y SOCIALDEMOCRACIA

Los que, desde la perspectiva neoliberal, critican el Estado del bienestar afirman que este sólo pudo desarrollarse en los países avanzados en épocas de crecimiento económico sostenido, pleno empleo y una demografía favorable.

Hoy, señalan los neoliberales, las economías incluso en fase de crecimiento, coexisten con elevadas tasas de desempleo, el déficit público es insostenible, y las pirámides de población de los países más industrializados se achatan por la base al tiempo que se ensanchan en las franjas de edades superiores, haciendo inviable el Estado del bienestar.

Hoy, señalan, no hay dinero para atender todas las necesidades, y aunque lo hubiera, el concepto de Estado-benefactor no es la manera adecuada de organizar las cosas para ser eficientes, competitivos, y en última instancia, seguir teniendo capacidad de generar riqueza.

Desde la perspectiva socialdemócrata, en sus variadas adscripciones, se critica el pensamiento liberal achacándole ser instrumento ideológico de los acomodados, y de no dar respuesta, con su acérrima defensa del individualismo, a las necesidades de importantes colectivos de población.

«Tenemos que generar riqueza para poder distribuirla, y para ello hemos de ser competitivos», dicen los socialdemócratas que hacen guiños al pragmatismo neoliberal. «Siempre nos toca esperar, nunca es nuestro turno. Distribuyamos mientras crecemos con un desarrollo más racional y humano», apunta la izquierda tradicional. «Demos libertad al individuo, liberémosle de un Estado sobredimensionado, burocrático e ineficaz, lastre de un verdadero progreso. El mercado nos llevará, de manera eficiente, a mayores cotas de riqueza», aseguran por su parte los neoliberales y conservadores en general.

En los últimos años, en los países avanzados del mundo occidental, son fundamentalmente la primera y la tercera de estas posiciones, las que venimos teniendo ocasión de conocer en su aplicación práctica.

Acotados ambos modelos en su funcionamiento práctico por la existencia de mercados cada vez más abiertos e interdependientes, por la incorporación al escenario económico internacional de nuevos países competidores geográficamente remotos, y por la presencia en los países más industrializados de una crisis económica de marcada componente estructural, los valedores de uno y otro modelo se ven obligados a reconocer, con la boca pequeña, que no hay gran margen de maniobra para seguir modelos preestablecidos. La realidad dictaría un pragmatismo de carácter innovador.

Hay que favorecer el comercio mundial y para ello profundizar en el libre comercio, hay que contener y disminuir el déficit público, no podemos «calentar» la economía, hemos de reducir la inflación, aplicar de modo consensuado entre países rigurosas políticas monetarias, y confiar en que ello genere empleo, parecen decir unos y otros de común acuerdo.

3. ENTRE LA QUIEBRA DEL SISTEMA Y LA DESPROTECCION

Entre la amenaza de quiebra de los Estados del bienestar, y la amenaza de la desprotección para una proporción significativa de la población, parece entonces situarse el debate.

Argumentan los liberales, que la necesaria reformulación sólo se puede hacer «soltando lastre» por parte del Estado. Para ellos, la salida de la crisis no puede sino ser dolorosa. ¡Ojo con el subsidio de desempleo que no vaya coercitivamente ligado a la formación para una recualificación «a plazo»! ¡Ojo con determinados niveles de gasto social cuyo coste de oportunidad es la inversión en infraestructuras, tecnología e innovación, que potencian el tejido productivo de un país! Y un largo etcétera.

Los socialdemócratas, —al menos en Europa los de aquellas latitudes inferiores que se enfrentan a un déficit histórico comparativo con países más al norte— discuten abiertamente acerca de si se puede salir de la crisis sin «soltar lastre», o al menos, no significativamente. Argumentan, y en ello no les falta razón, que existe un margen de maniobra a través de la racionalización de los procedimientos y de la mejora en la gestión —¿por qué no privatizar ésto o aquello, por qué no eliminar líneas de intervención pública quizás superfluas?, ¡acabemos con el fraude al Estado del bienestar!— dicen instalados en

un pragmatismo que impide que se rasgen las vestiduras.

No obstante la cierta convergencia de funcionamientos prácticos de uno y otro modelos, persisten notables diferencias tanto aplicadas como teóricas.

Dicen los liberales: ¡Hay que reducir el tamaño del sector público; hay que privatizar todo lo susceptible de generar beneficio; hay que disminuir los impuestos y modificarlos —por ejemplo, la imposición proporcional sobre la renta es nociva para la generación de riqueza y contrariamente a lo que pareciera no actúa como mecanismo de redistribución de la renta—; el Estado, ni puede, ni debe, sostener a los «vagos»; la pobreza, generalmente, actúa como acicate para su superación; hay que flexibilizar, sino liberalizar, los mercados —entre ellos el mercado de trabajo—.

Dice la socialdemocracia: la intervención pública en la economía es vital para garantizar la adecuada cobertura de necesidades básicas de la población; un sistema impositivo tal que grave más al que más tiene o genera, es un mecanismo irrenunciable de redistribución de la renta, acorde con los objetivos de mayor igualitarismo inherentes al postulado socialdemócrata. El Estado debe seguir desempeñando un papel primordial en la provisión de bienes y servicios y en su distribución, quizás no obstante, ir avanzando en fórmulas innovadoras que permitan un mayor «rol» de la sociedad civil.

Y en algunos países del Sur de Europa, añaden: No hemos alcanzado las cotas de bienestar que otros países disfrutaron y que ahora comienzan a recortar. ¿Debemos recortar también nosotros, en qué medida? En 1990, España destinó 21 de cada cien pesetas a financiar su Estado del bienestar, mientras el resto de la Comunidad Europea, como media, asignó 27 pesetas.

Esencialmente, esos serían los postulados de las dos aproximaciones. Una mirada a vista de pájaro sobre los países en los que ambos modelos han sido aplicados, nos impide dejar de señalar significativos déficits sociales en ellos, cuando no un ahondamiento de las diferencias entre sectores sociales.

De esta manera, se plantean cuestiones tales como si es éticamente aceptable y aún eficaz económicamente a medio plazo, la desprotección de los 30 millones de parados que existen en la O.C.D.E. —que agrupa a los países más ricos del mundo—. O la disminución relativa del gasto

social en las personas mayores, en sociedades de rápido ritmo de envejecimiento y donde la esperanza de vida aumenta de año en año. Por ejemplo.

En Estados Unidos, paradigma del modelo liberal y país que se encuentra en una mejor posición para afrontar la salida de la crisis, el Gobierno Federal ha propuesto al legislativo un plan de reforma de su sistema de salud porque, más allá de posturas doctrinales, la sociedad norteamericana no podría permitir que los 17 billones de pesetas del presupuesto de salud del país del mundo que más gasta en sanidad, dejen fuera a 36 millones de conciudadanos. La actual administración norteamericana confía en poder demostrar que la universalización de la cobertura de salud, un mayor énfasis en la prevención y otras medidas de reforma, permitirán un menor y más racional nivel de gasto sanitario en un futuro próximo, al tiempo que garantizarán una mejor salud de los ciudadanos.

4. ¿HACIA UNA CONVERGENCIA PRAGMATICA PARA SALIR DE LA CRISIS?

La profundidad y las características novedosas de la actual crisis, podrían conducir a las políticas aplicadas por sendas de mayor convergencia y pragmatismo, abandonando posicionamientos doctrinales.

En efecto, hoy en día se acepta de modo general, que las actuales condiciones de globalización de los mercados y creciente competencia —agudizadas en la última década— obligaran a las economías a salir de la crisis planteando decididas reformas estructurales y no simplemente a través de la aplicación de medidas anti-crisis. No se tratará por tanto, de pretender simplemente superar el actual estancamiento y volver a crecer, sino de hacer que la economía funcione de una manera distinta, más eficientemente.

Todos admiten al unísono que el objetivo es ser más competitivos a fin de poder generar riqueza. De cara a ese objetivo general los puntos sobre los que se suscitan acuerdos básicos son sustanciales.

Así por ejemplo, el control del déficit público y el descenso armónico en los distintos países de los tipos de interés —medidas necesarias pero no suficientes para la salida de la crisis— son esencialmente aceptados por unos y otros.

También parece existir suficiente coincidencia en cuanto a que las políticas mo-

netaristas, profusamente utilizadas en los últimos años, han de ceder parte de su protagonismo a otras medidas.

Todo el mundo parece aceptar hoy la importancia de no soslayar la denominada «economía real» —productiva— en favor de sectores financieros, atacados en ocasiones por tentaciones especulativas y mentalidad de corto plazo. Los esfuerzos de todos deben orientarse al apuntalamiento y potenciación del tejido industrial, favoreciendo la inversión a largo plazo.

La formación permanente de los recursos humanos de las empresas, la educación —adaptada a las necesidades del mercado de trabajo—, y la innovación en técnicas y métodos, deben ser el norte dinámico que guíe la actuación de los agentes económicos y sociales.

La identificación de una fiscalidad que aliente el ahorro y la inversión a largo plazo —obviando aquellas de ánimo excesivamente recaudatorio y vocación de corto plazo— es asimismo generalmente aceptada.

En el contexto europeo, y aún internacional, la nueva paridad de las monedas, más realista tras las últimas tormentas monetarias, es asumida como un necesario reajuste que permitirá afrontar el futuro de mejor manera.

Todos, de común acuerdo, aceptan la racionalización del gasto y la mejora en la gestión del sector público, como objetivos factibles e inaplazables. Suscita gran coincidencia asimismo la oportunidad de que la Administración Pública arbitre fórmulas de colaboración que vinculen crecientemente a la sociedad civil.

Sobre estas y otras vías para reformar nuestras economías y hacerlas más competitivas en el concierto internacional, existe, por tanto, acuerdo sustancial.

Sin embargo, se discute —de manera especial— si esa vía de reforma y adaptación a las nuevas exigencias del mercado, permite o no el mantenimiento de los denominados Estados del bienestar, o, en su caso, qué reformulaciones habría que introducir en estos.

En Europa, el debate abierto se formula en los siguientes términos. La C.E.E. discute acerca de si «enterrar el Estado del bienestar, que es económicamente insostenible y que conduce al retraso europeo frente a Estados Unidos», como señalaba recientemente un Comisario Comunitario, o su mantenimiento, como preconiza el Presidente de la Comisión Europea Jac-

ques Delors: «no he venido a hacer una Europa de la desregulación y del dumping social, ni a regresar a condiciones de trabajo de hace 50 años».

5. REFORMULAR EL ESTADO DEL BIENESTAR

Entre ambas posiciones, la necesidad de una profunda reformulación del Estado del bienestar, y aún de un ajuste en las prestaciones sociales, está claramente asumida en los gobiernos europeos.

Así por ejemplo, Francia disminuye su gasto sanitario. Alemania —con su inequívoca mejor posición competitiva, pero con el lastre de la necesaria adecuación del territorio de la antigua República Democrática Alemana— ajusta sus cuentas, y recorta para 1994 en 1,5 billones de pesetas su gasto social.

En Francia, para cobrar una pensión en el futuro, será preciso cotizar durante más años, siendo la expectativa una percepción futura menor.

El canciller alemán, Kohl, cuestiona la jornada laboral alemana y plantea más años de cotización para poder cobrar una pensión. «Es inaceptable que muchos alemanes estudien hasta los treinta años, se jubilen a los 58 ó 59 años, para llegar a cumplir los 80 años. El tiempo de vida productivo es mucho menos que el subvencionado», señala el jefe del ejecutivo alemán. Otros, como Rocard en Francia, plantean distribuir el trabajo existente trabajando cada uno menos horas y cobrando proporcionalmente menos.

Liberales, socialdemócratas y otras opciones políticas cuestionan el cómo de la necesaria reformulación de los Estados del bienestar tradicionales.

Aun aceptándose la necesidad de preparar la economía y la sociedad para una creciente competitividad en un entorno económico globalizado, cabe resistirse a la aplicación de recetas estándar planteadas como «únicas vías posibles».

La Europa de los doce —la de la Unión Europea desde el pasado día 1 de noviembre— cuenta con 18 millones de parados, y hoy la productividad hace posible que coexistan crecimiento y no generación de empleo —o al menos no proporcional—. ¿Qué dimensión alcanzará el problema del desempleo y el de la protección social, si tomamos en consideración el escenario de una Europa que incluya, además de los países escandinavos, los de Europa Central y del Este?

Entre la quiebra de unos sistemas de cobertura social y la desprotección —si quiera relativa— de amplios sectores de población, se plantean importantes interrogantes, de carácter al mismo tiempo ético y práctico. ¿Qué desviación respecto de la media pueden soportar las sociedades avanzadas en los niveles de renta por grupo social? ¿Qué tasas de desempleo se pueden tolerar sin tener que enfrentarse a crecientes economías sumergidas, corrupción y desmembración social? ¿Es posible desmontar sistemas de protección social que han sido referencia para todos los países del planeta? ¿La sociedad civil, sin el

apoyo del Estado, podrá cubrir las demandas sociales?

Mientras se discute sobre si la pobreza actúa como estímulo para su propia superación, o si los subsidios —de pobreza, de desempleo,...— sólo sirven para generar subsidiados crónicos, ¿qué se puede hacer con la realidad, con la pobreza, con el paro? ¿El Mercado proveerá, el Estado proveerá, o será preciso diseñar fórmulas intermedias de carácter pragmático e innovador que den respuestas suficientes, superando los postulados tradicionales?

Ramón Barinaga Osinalde